

Expediente: **1498/19**

Carátula: **GALVAN ANDREA DE FATIMA C/ COBROS Y SERVICIOS S.R.L. S/ COBRO DE PESOS**

Unidad Judicial: **JUZGADO DEL TRABAJO VI**

Tipo Actuación: **FONDO**

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

JUZGADO DEL TRABAJO VI

ACTUACIONES N°: 1498/19



H103063654692

JUICIO: GALVAN ANDREA DE FATIMA c/ COBROS Y SERVICIOS S.R.L. s/ COBRO DE PESOS. EXPTE. N° 1498/19

San Miguel de Tucumán, 10 de mayo de 2022.

AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia definitiva en la causa del título "GALVAN ANDREA DE FATIMA c/ COBROS Y SERVICIOS S.R.L. s/ COBRO DE PESOS" que tramitó ante este Juzgado del Trabajo de Primera Instancia de la VI Nominación, de cuyo estudio

RESULTA:

En fecha 06/09/2019 (fs.2/56), los letrados Segundo Albino Medina Robles y Deborah Lorena Medina Robles, en su carácter de apoderados de la Sra. Andrea de Fátima Galván, DNI N°27.562.746, con domicilio en calle Costa Rica N°244 de esta ciudad y demás condiciones personales que constan en el poder *ad litem* agregado a f. 2, iniciaron demanda contra Cobros y Servicios SRL (Rapipago), con domicilio en calle 25 de mayo N°319 de ésta ciudad, por la suma de \$398.265,98 en concepto de indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, SAC sobre preaviso, integración mes de despido, SAC sobre integración mes de despido, vacaciones no gozadas, SAC proporcional, multa art. 2 Ley N°25323, diferencias salariales, SAC sobre diferencias salariales y daño moral.

En el relato de los hechos expusieron que su mandante ingresó a trabajar para la demandada el día 04/04/2017 y cumplía las funciones de cajera de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 13:30 horas y los sábados de 09:00 a 13:30 horas. Detallaron que los diferentes lugares en los que la actora desarrolló su labor para la demandada, pero precisaron que al momento del despido, ella cumplía sus tareas en el local ubicado en calle 25 de Mayo N°319 de ésta ciudad.

Explicaron que en fecha 04/06/2019 la accionada procedió a despedir a la actora atribuyéndole que, sin autorización alguna, retuvo la suma de \$2600 del dinero que había ingresado a la caja por cobranzas que esta efectuó. Reconocieron que efectivamente la actora tomó ese monto de dinero para abonar la boleta de luz domiciliaria que se le vencía, pero negaron la causa de despido con fundamento en que dicho proceder fue con la autorización del encargado Daniel Soria, como ya había ocurrido en otras ocasiones y que luego ese monto sería descontado al momento de percibir su sueldo. Sostuvieron que la medida adoptada por la empresa fue drástica y sin justificación alguna, sin tener en cuenta las condiciones relevantes de labor que su mandante brindó a la accionada. Seguidamente transcribieron la carta documento de despido en su parte pertinente.

Continuaron diciendo que mediante TCL 091860525 de fecha 06/06/2019, la actora rechazó la CD del 04/06/2019 por ser improcedente, falaz y carente de todo sustento legal, por no ser ciertos todos y cada uno de los hechos que se le atribuyen en la misma y ratificó los hechos enunciados en el párrafo

anterior. Finalmente, indicaron que aquél telegrama fue rechazado por la demandada mediante carta documento de fecha 11/06/2019.

Acotaron que mediante Expte. N°8336/18/G 2019 de la Secretaría de Estado de Trabajo se efectuó el reclamo administrativo pertinente, el que cerró sin acuerdo conciliatorio.

Explicaron que el día 17/10/2019 la actora intimó a la patronal a que se le abone la indemnización por todo el período trabajado en tanto desconoció completamente las causas invocadas y, a que se le abone las diferencias salariales en virtud de la jornada completa de labor desarrollada, siendo que percibía salarios muy inferiores a los establecidos por el Convenio de Empleados de Comercio. Dicha intimación también fue rechazada por la demandada, según agregaron. En este sentido, insistieron en que su mandante trabajó una jornada de nueve horas y medias de labor, pero de sus recibos de sueldo se desprende que estaba registrada como jornada reducida.

Para finalizar, practicaron planilla de rubros reclamados e hicieron reserva del caso federal. En fecha 08/11/2019 (f. 60) acompañaron la documentación original respaldatoria de su pretensión conforme recibo de f. 61.

Corrido traslado, en fecha 17/09/2020 se presentó el letrado Santiago Viejobueno, en carácter de apoderado de Cobros y Servicios SRL, CUIT N°30-68522850-1, con domicilio en calle 25 de mayo n°319 de esta ciudad y demás condiciones personales que constan en el poder general para juicios acompañado en fecha 25/09/2019. En tal carácter contestó demanda y solicitó su rechazo con expresa imposición de costas. Acreditado el carácter invocado, en fecha 28/09/2019 se lo tuvo por apersonado.

Luego de una negativa genérica y particular de cada uno de los hechos invocados en la demanda, ofreció su versión. Precisó que la actora comenzó a trabajar para su poderdante el 04/04/2017 y con esa fecha fue debidamente registrada ante la AFIP. Acotó que aquella cumplía tareas de cajera categoría B del CCT N°130/75 en distintos puntos de cobranza Rapipago que su mandante explota como franquiciante de la empresa Gire SA. Expresó que la actora estuvo principalmente dedicada a la atención al público y cobranza de cajas de Rapipago.

Con respecto a la duración de su jornada, esgrimió que se extendía durante cuatro horas diarias de lunes a sábados, prestando servicios en forma permanente y a tiempo parcial de conformidad con lo dispuesto por la LCT y el CCT N°130/75. Aclaró que esa jornada de trabajo era cumplida por la trabajadora normalmente en el horario matutino de 9:00 a 13:00 horas, pero en ocasiones y según la solicitud de los mismos empleados, los servicios cambiaban al horario vespertino de 17:00 a 21:00 horas. Los días sábados se trabajaba solamente de 9:00 a 13:00 horas, según acotó. Añadió que la accionante recibió la capacitación necesaria para llevar a cabo su trabajo de cobranzas y se le impartió las instrucciones precisas respecto al manejo de los fondos y al resguardo del dinero recaudado.

Con relación a la causa de despido, expuso que el 30/05/2019, el Sr. Daniel Soria, empleado de su poderdante, llevó a cabo una auditoría y control del cierre de la caja de la actora (como era habitual, según acotó) en el cual detectó un faltante de \$2600 de las cobranzas realizadas a Tarjeta Ciudadana, situación que comunicó de manera inmediata a su empleadora. Siguió diciendo que ese faltante motivó que el 31/05/2019, la empresa le cursara una nota -la que transcribió en forma textual- a la actora, firmada por la apoderada Patricia Tam Schmieloz, por la que le requirió las explicaciones del caso. En consecuencia, explicó que la actora formuló su descargo ese mismo día al pie de aquella nota, reconociendo con su puño y letra que el 30/05/2019 tenía el faltante antes señalado y que había sacado ese dinero para pagar la boleta de luz, advirtiendo que lo iba a reponer cuando cobrase sus haberes. Infirió de dicho descargo, que la actora jamás requirió permiso ni autorización para quedarse con esa plata y ni siquiera acudió a pedir un vale, que es el adelanto de sueldo que otorga la empresa.

Aclaró que retener dinero de la recaudación era una práctica que estaba terminantemente prohibida pues en cualquier momento podía pasar el recaudador de Tarjeta Ciudadana y retirar el dinero cobrado en el Rapipago de ese cliente, sin estar éste disponible para aquél. Además señaló que es una práctica que generaría un tremendo desorden en los arqueos y rendiciones de las cobranzas. Remarcó que es indiscutible que las funciones de una cajera conllevan una diligencia y cuidado especial en el manejo del dinero. Acotó que la actora ni siquiera acompañó con su presentación la boleta de luz por la que supuestamente retuvo el dinero, por lo que dedujo además que las justificaciones por ella esgrimidas son inexistentes.

Señaló que en este marco, contrariamente a lo sostenido en la demanda, resulta justificado que su mandante haya considerado imposible la continuidad del vínculo laboral ante la eventualidad de que situaciones similares pudieran repetirse en el futuro, todo lo cual, razonablemente, reviste entidad suficiente para afectar de modo definitivo la confianza y el respeto recíproco que necesariamente debe existir en el contrato de trabajo. Citó jurisprudencia que consideró acorde en apoyo de su postura.

Por otro lado, solicitó que se considere especialmente que la conducta irregular y objetivamente reprochable atribuida a la actora para su despido, se vio agravada por la circunstancia de haber sido reiteradamente apercibida por similares inconductas (mal manejo de la cobranza en fechas anteriores, según acotó), así como haber sufrido varias suspensiones atento a su indebido comportamiento, como se desprende del legajo de la actora y de las sanciones acompañadas por ella con la demanda. En especial pidió que se considere que en el mes de enero de 2019, es decir, cuatro meses antes de su despido, la actora había sido suspendida por 25 días por no resguardar los fondos cobrados para la empresa Rapipago (Gire SA) al haber omitido depositar la suma de \$320.000 en el buzón de seguridad, según da cuenta la nota de fecha 17/01/2019 también acompañada por la actora con su demanda. Adujo que las repetidas sanciones y la conducta desaprensiva de la actora, deben ser consideradas a la luz de los precedentes jurisprudenciales, entre los cuales transcribió uno que consideró pertinente.

Para finalizar impugnó planilla y pidió que se tenga por ofrecida la prueba documental acompañada.

Mediante proveído de fecha 18/12/2020 se abrió la causa a prueba.

En fecha 01/02/2021, se apersonó en representación de la demandada y en carácter de apoderado el Dr. Lucio Tosi, dejando sin efecto el poder anteriormente otorgado a favor del Dr. Santiago Viejobueno.

En fecha 06/08/2021 se llevó a cabo la audiencia dispuesta por el art. 69 del CPL a la que comparecieron el letrado Segundo Albino Medina Robles por la parte actora y, el letrado Lucio Tosi por la demandada, quienes manifestaron la imposibilidad de conciliar. En su mérito, según consta en acta de igual fecha se tuvo por intentado el acto conciliatorio en los términos del art. 73 del CPL y se procedió a proveer las pruebas ofrecidas por las partes.

El 27/12/2021 se procedió por Secretaría Actuarial a confeccionar el informe requerido por el art. 101 del CPL, del que surge que la parte actora ofreció cuatro cuadernos de prueba: 1) Instrumental: producida. 2) Informativa: sin producir. 3) Exhibición de documentación: producida. 4) Testimonial: producida e incidente de tacha de testigos. Mientras que la parte demandada ofreció los siguientes: 1) Instrumental: producida. 2) Informativa: sin producir. 3) Reconocimiento: producida. 4) Confesional: producida. 5) Testimonial: producida e incidente de tacha.

En fecha 03/02/2022 la parte actora presentó su alegato y en fecha 14/02/2022 lo hizo la parte demandada.

Finalmente, 15/02/2022 se ordenó que pasen los autos a despacho para dictar sentencia definitiva.

CONSIDERANDO:

De los términos de la demanda y la contestación, resultan hechos admitidos expresa o tácitamente por las partes y, por ende, exentos de prueba los siguientes: 1) La existencia de una relación laboral entre la Sra. Andrea de Fátima Galván y la firma Cobro y Servicios SRL. 2) La fecha de ingreso de la actora: 04/04/2017. 3) El lugar de trabajo al momento del despido: 25 de Mayo N°319 de ésta ciudad. 4) La categoría profesional: Cajera "B" conforme CCT N°130/75. 5) La registración de la jornada laboral de la actora como jornada parcial de trabajo. 6) La extinción de la relación laboral producida por despido directo instado por la demandada mediante CD N°384242585 del 04/06/2019.

Con respecto a la fecha de egreso, cabe precisar que tanto la actora como la demandada coinciden en señalar el día 04/06/2019 como tal. Dicha fecha es la fecha que consta en el sello postal de Correo Argentino de la misiva de despido, de modo que al no contar con el informe de dicha entidad -ya que no se produjo la prueba informativa solicitada por la actora- como excepción a la teoría recepticia de las comunicaciones cabe tenerla por recibida en la misma fecha de su envío (16/05/2018) conforme el sello postal impreso y lo manifestado por las partes (cf. Cám. del Trabajo Sala 4, "Salvatierra Mercedes del Valle vs. Sequeira Héctor Fernando s/cobro de pesos, sent. n° 24 del 14/03/2019; Cám. del Trabajo Sala 5, "Gonzalez, Gonzalo Miguel vs. Servicios Agroindustriales del NOA SRL, sent. n°

270 del 25/07/2016, entre otras). Así lo declaro.

Asimismo, cabe declarar reconocido el intercambio telegráfico celebrado entre las partes así como la documental acompañada con el escrito de contestación de demanda en virtud de lo manifestado por la actora en la audiencia de reconocimiento celebrada el día 01/09/2021 en el cuaderno de prueba n°3 ofrecido por la demandada.

En consecuencia, las cuestiones litigiosas, controvertidas y de justificación necesaria sobre las que este sentenciante deberá expedirse (art. 265 inc. 5 del CPCCT supletorio) son las siguientes: 1) Extensión de la jornada laboral y calificación jurídica. Remuneración devengada. 2) Causa de despido y su justificación. 3) Procedencia de los rubros reclamados. 4) Intereses, planilla de condena, costas y honorarios.

Para la dilucidación de los puntos de conflicto serán de aplicación las disposiciones del CCT N° 130/75 y, en lo que fuere pertinente la Ley N°20744 de Contrato de Trabajo (en adelante LCT). Así lo declaro.

A tales efectos, se analizarán las pruebas rendidas en estos actuados, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 32, 33, 40, 265 inc. 4 y ccddes. del CPCC, de aplicación supletoria en este fuero.

PRIMERA CUESTION

Extensión de la jornada laboral y calificación jurídica

En la demanda se postuló que la actora laboraba de 08:30 a 13:30 horas y los sábados de 09:00 a 13:30 horas y que las remuneraciones abonadas eran inferiores a lo establecido por las escalas salariales aplicables para un trabajador de jornada completa. En función de ello se reclamó el pago de diferencias salariales.

En una posición adversa la demandada sostuvo que la actora se desempeñó durante una jornada a tiempo parcial, durante cuatro horas diarias en

en el horario matutino de 9:00 a 13:00 horas, y en ocasiones en horario vespertino de 17:00 a 21:00 horas. Los días sábados se trabajaba solamente de 9:00 a 13:00 horas.

A la hora del análisis de este hecho tengo en cuenta que jurisprudencial y doctrinariamente es admitido que como regla general la jornada de trabajo se presume por tiempo completo, siendo a cargo de las partes la prueba de una jornada reducida o extraordinaria. Así, el art. 198 de la LCT dispone: *“Jornada reducida. La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con las características de la actividad.”* La norma transcripta sujeta “la reducción de la jornada máxima legal” a la existencia de una estipulación, de suerte que quien invoque la existencia de dicha convención deberá demostrarla (Ojeda, Raúl Horacio; “Ley de Contrato de Trabajo Comentada y concordada”, 2da.Ed. Santa Fe; RubinzalCulzoni, 2011, Tomo II, página 71).

En ese sentido se ha considerado que: “la carga de la prueba de la jornada reducida corresponde al empleador que la invoca” (conf. CSJT. sent.N°760/2012; 852 /2017; 76/2017; 644/2016).

En ese contexto surge que la jornada normal de trabajo es la regla, en tanto que la reducida es la excepción, la que sólo puede ser establecida -conforme se infiere de la norma- por las disposiciones legales que reglamenten la materia.

En mérito a todo lo expuesto y dada la disparidad de las posiciones mantenidas por las partes respecto de esta cuestión, corresponde analizar el plexo probatorio ofrecido por la demandada en esa dirección.

En fecha 14/10/2021 -en el cuaderno de prueba n°5 ofrecido por la demandada-, se tomó declaración testimonial al Sr. Domingo Daniel Jesús Soria, quien interrogado a tenor de las generales de la ley manifestó trabajar actualmente para la accionada y ser no solo empleado, sino también recaudador, recaudador de fondos y encargado. En respuesta a la pregunta 5) del cuestionario propuesto que reza: *“Diga el testigo, dando razón de sus dichos, cuál era la jornada de trabajo de la Sra. Galván Andrea de Fátima”*, dijo: *“Turnos rotativos, todos los empleados trabajan en turnos*

rotativos de cuatro horas diarias, puede ser por la mañana de 09.00 a 13.00 o de 17.00 a 21.00 horas de lunes a sábados, los sábados únicamente actualmente se trabaja por la mañana, lo sé porque yo lo manejo a todos los empleados, manejo los turnos”.

Pese a ello, esta declaración no puede ser considerada en forma aislada, sin tener en cuenta cómo se desarrolla normalmente la actividad comercial de la demandada, es decir, en qué horarios abren los locales dedicados al servicio de cobranzas. En efecto, de la misma declaración frente a las repreguntas de la contraria: “1): *Para que diga el testigo como era la habitualidad del Rapi Pago en donde trabajaba la actora respecto de los horarios de la atención al público*”, y “2) *Para que diga el testigo si en todos los locales de Rapi Pago donde trabajo la actora durante 2019 también lo hacían otras empleadas en el mismo horario cumpliendo idénticas tareas*”, el Sr. Soria expresó respectivamente: “1) *De 09.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas por la mañana estaba un cajero, por la tarde otro y así van rotando de lunes a sábados*; 2) *No, en todos los locales hay una sola persona, un solo cajero, en los demás locales si pero en todos los puestos hay una sola persona, se trabaja de igual manera en todos los locales, en todos hay una sola persona*”.

De este modo no se explica que si el horario de atención era de 9 a 13 y de 17 a 21 horas y en todos los locales de la demandada había un solo empleado, la actora haya prestado servicios únicamente en jornada parcial como alegó la accionada en su responde, más allá de la rotación de turnos que menciona el testigo en su declaración. No se registra prueba siquiera de la existencia de otros empleados que hayan compartido el puesto de trabajo de la actora mientras estuvo vigente la relación laboral.

Además, cabe tener presente que este fue el único testigo que precisó el horario de trabajo de la actora y que no obran en la causa otros elementos (además de los emitidos y elaborados en forma unilateral por la demandada -registraiones ante AFIP y recibos de haberes-) que pudieran corroborar esta declaración de una persona que actualmente es dependiente de la accionada.

En este sentido, aún cuando el carácter de dependiente de la demandada empleadora no es una causal que, por sí, permita invalidar el testimonio de una persona, sí debe ser considerada en forma restrictiva debido a la presencia de un elemento que permite presumir la posibilidad de la distorsión de la imparcialidad de su declaración debido al carácter hiposuficiente y de subordinación de un trabajador durante la vigencia de una relación de trabajo con relación a su empleador (conf. Cám.Civil y Com.Concepcion, sent. 196, del 31/8/2000; Cám.Trab.Concep., sala 1, sent. 52 del 3/4/2014; Cám.Trab., sala 4, sent. 16/2014). Por ello, su testimonio solamente podría ser suficiente para crear la convicción en el magistrado en caso de que existieran elementos de la propia declaración que permitan sostener aquella fuerza convictiva surgida de los datos y pormenores que brinda, siendo en tal caso relevantes las razones que expone para explicar el conocimiento de los hechos que declara y/o que aquellos datos brindados puedan ser corroborados por otras pruebas surgidas durante el proceso (ex., otros testimonios, etc.).

En el caso, tal como se dijo, los únicos elementos que avalan este testimonio y la versión de la demandada son los propios documentos que esta última elabora de modo unilateral y que, impugnados en cuanto a la veracidad de su contenido por la parte actora, resulta carga de la prueba de la demandada empleadora demostrar su correlación con la realidad (conf. CSJT, sent. 127 del 6/3/2017).

Cabe mencionar que las tachas formuladas por la parte actora frente a la declaración testimonial del Sr. Soria se tuvieron por desistidas conforme lo proveído en fecha 18/11/2021 en el incidente identificado como expte. N°1498/19-D5-I1, por lo que ya encontrándose resuelta esa cuestión durante el transcurso del proceso, no corresponde referirme a las mismas en virtud del principio de preclusión y cosa juzgada.

Pero aun cuando aquellas tachas fueron desestimadas oportunamente, ello no obliga a este magistrado a aceptar su declaración (conf. CSJT, sent. 1085 del 3/11/2014). En virtud de ello y por lo considerado, se prescindirá de este testimonio por no haber creado la convicción suficiente de los hechos que expuso.

Lo mismo sucede con las declaraciones testimoniales ofrecidas por la actora, de las que no surge en forma precisa cuál era el horario de trabajo cumplido por la Sra. Galván, por lo que no merecen ser valoradas a los fines de dilucidar la cuestión controvertida. Ello por cuanto al declarar respecto del horario que cumplía la actora, expresaron solamente el momento del día en que la veían cuando utilizaban los servicios del establecimiento de la demandada, en su carácter de clientes, pero sin que

brindaran elementos de la extensión de esa jornada laboral. En virtud de ello, al no ser útil estos testimonios para resolver la cuestión debatida, resulta abstracto expedirme en relación a las tachas formuladas por la demandada.

Como consecuencia, en ese contexto y con tales precedentes considero que la demandada no logró desvirtuar la presunción antes referida respecto de la extensión de la jornada laboral, por lo que cabe considerar que la actora prestaba servicio para la accionada en jornada completa de trabajo, establecida en el CCT N°130/75. Así lo declaro.

Remuneración devengada

En relación a este extremo de la relación laboral, lo desarrollado precedentemente permite concluir que por haber laborado una jornada completa de labor y estar encuadrada en la categoría de cajero B del CCT N°130/75, a la accionante le correspondía percibir el total de la remuneración establecida en las escalas salariales del CCT N°130/75. Así lo declaro.

SEGUNDA CUESTION

Causa de despido y su justificación

En relación a este punto de controversia, resulta indispensable precisar como primera medida que la existencia del hecho injurioso invocado por la demandada para decidir el despido directo de la actora en fecha 04/06/2019, no se encuentra discutida. En efecto, de la CD N°384242585 del 04/06/2019 se puede inferir que la causa por la que la demandada determinó la desvinculación de la actora fue que ésta extrajo la suma de \$2600 de la caja de las cobranzas realizadas a Tarjeta Ciudadana. Esta situación no solo se encuentra reconocida por la misma actora en su libelo inicial, sino además en el descargo efectuado de puño y letra al pie de la nota de fecha 31/05/2019 -por la que se le requirió diera las explicaciones respecto del faltante detectado-, en la que expresó textualmente lo siguiente: *“En el día de la fecha 30-05-2019 fue el Sr. Daniel Soria y sí tenía un faltante de \$2600. Yo no acudí a pedir un vale por no saber la fecha en que se podía pedir. El faltante di a conocer al Sr. Soria a momentos de realizar la auditoria. Yo le expliqué al señor que yo saqué para efectuar el pago de mi boleta de luz y yo reponese el dinero cuando cobre mis haberes. Sin más”*. Cabe destacar que dicho documento fue incorporado a la causa en fecha 22/10/2019 por Cobros y Servicios SRL como respaldo instrumental de su responde, y la actora en la audiencia de reconocimiento celebrada el día 01/09/2021 en el cuaderno de prueba n°3 ofrecido por la demandada manifestó que reconocía como de su puño y letra todas las firmas insertas en la documental exhibida en ese acto, entre ella la referida nota.

Discuten las partes concretamente si la extracción fue con o sin autorización del encargado Daniel Soria.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 242 de la LCT permite que cualquiera de las partes de un contrato de trabajo lo denuncie en caso de inobservancia, por parte de la otra, de las obligaciones resultantes de este y que configuren injuria que por su gravedad no consientan la prosecución de dicha relación.

En este sentido la jurisprudencia es coincidente en sostener que el juzgador al valorar la injuria debe tener en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad y que el hecho que se constituye en causa del despido debe revestir una magnitud suficiente para desplazar del primer plano el principio de conservación del empleo al que hace referencia el art. 10 de la ley de contrato de trabajo (cfr. Cámara del Trabajo, Concepción, Sala 2, “Avila Angel Miguel vs. Martin Isaac y Sleiman Rosa M. S.H. y otros s/ cobro de pesos”, sent. n° 12 del 15/02/2017).

Asimismo, del citado artículo 242 surge que la valoración de la gravedad de la causal de despido debe ser efectuada por el juez, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan del contrato de trabajo en cuestión, como así también las modalidades y circunstancias personales de cada caso (cfr. CSJT, “Ruiz, Lucia Angela vs. Instituto del Riño y Diálisis del Sur y/o Moreno, Héctor Antonio s/ Despido”, sentencia n° 579 del 17/08/2010, “Coria vs Libertad”, sent. 468/2012; “Perez vs Cruz Alta”, sent. 376/2006, entre otros).

Además, se ha definido la injuria, como un acto u omisión contrario a derecho que importa una inobservancia de deberes de prestación o de conducta, imputable a una de las partes, que lesiona el vínculo laboral. Asimismo, autorizada doctrina tiene dicho que tres son los presupuestos de hecho que deben concurrir para considerar que se ha producido una injuria laboral: 1) un comportamiento

antijurídico, manifestado como incumplimiento de una obligación expresa o implícitamente impuesta por la naturaleza del vínculo laboral a la parte a la que se dirija el reproche; 2) la imputabilidad de tal inobservancia a la parte que se considere incumplidora; 3) la afectación de la relación de trabajo. (cfr. Ackerman, Mario E. "Sobre la denominada valoración judicial de la "gravedad" de la injuria". Procedimiento Laboral III. Rubinzal- Culzoni Editores, Año 2008 / Tomo N° 1 / Pág. 87/96).

Sobre el particular, la Excma. Corte Suprema de Justicia de la provincia ha expresado también que "las partes vinculadas por una relación de carácter laboral asumen una serie de obligaciones, cuya violación configura un ilícito contractual en la medida en que tal conducta no se ajusta al comportamiento requerido por el contrato de trabajo. Empero, estas violaciones no siempre legitiman sin más el ejercicio de las facultades resolutorias; en esta materia, la legislación laboral, en defensa del principio de conservación del contrato, ha limitado las posibilidades resolutorias de las partes, reservándolas exclusivamente para el caso de constatarse un incumplimiento que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación" (cfr. CSJT, Sala Laboral y Contencioso Administrativo, "Bayo José Ricardo vs. Sanatorio Integral Luz Médica S.A. y/o Luz Médica S.A. y Luna Julio Ernesto s/cobro de pesos", sent. n° 1128 del 21/09/2016).

En relación al punto de conflicto en la presente litis, insisto que la retención de dinero de la recaudación alegada por la demandada fue reconocida por la propia accionante.

Sin embargo, es necesario analizar, conforme lo expresado, si dicha situación le era imputable y, en su caso, si tenía tal entidad como para justificar la extinción del vínculo laboral existente.

Así pues, las partes centran la discusión particularmente en si la Sra. Galván estaba autorizada o no a extraer ese dinero de la caja. En este sentido, de las pruebas rendidas, únicamente contamos con la declaración testimonial del Sr. Domingo Daniel Jesús Soria, encargado del local donde laboró la actora, quien en fecha 14/10/2021 -en el cuaderno de prueba n°5 ofrecido por la demandada- al ser consultado sobre lo sucedido el 30/05/2019 manifestó: *"Le estaba realizando la auditoria a la señorita Galván como se lo realizo a todo el personal, se lo realizo una vez al mes, y primero se recuenta la plata recaudación de Rapi pago y estaba bien, la recaudación de ella de la tarjeta ciudadana porque aparte tenemos recarga de tarjeta ciudadana es otra caja, haciendo el recuento tenía el faltante de \$2600 y en ese momento bueno, le dije que ella no puede tener ese tipo de faltante ni ella ni nadie, le pregunte qué es lo que paso y me dijo que había sacado dinero para pagar un impuesto personal, lo saco para pagar la boleta de la luz, de ahí yo le pregunte si ella estaba consciente y todo lo demás que no podía sacar dinero ni ella ni nadie, nadie estaba autorizado y le hice firmar una nota en donde ella escribió en puño y letra todo lo que había pasado"*.

Ahora bien, si bien este testimonio debe ser analizado con criterio restrictivo por las razones expuestas en la cuestión precedente y más allá de que la demandada no acompañó prueba alguna que corrobore que la actora no estaba efectivamente autorizada a efectuar la extracción que derivó en su despido (por ejemplo, un manual con instrucciones respecto del manejo de fondos por parte de los cajeros), no es menos cierto que debe tenerse en cuenta particularmente la función que cumplía la actora y los antecedentes disciplinarios denunciados por la demandada y reconocidos por aquella.

Así pues entonces, la demandada en la misiva de despido precisó que para adoptar la máxima sanción prevista por el régimen laboral tuvo en cuenta las numerosas faltas y los antecedentes laborales de la actora directamente vinculados con el impropio manejo de la caja y, en particular, la suspensión de 25 días sin goce de haberes dispuesta el 17/01/2019 por un grave incumplimiento relacionado al imprudente manejo de su caja. Textualmente se refirió a ese hecho de la siguiente forma: *"(el 09/01/19 encontramos \$320.000 por Ud recaudados el día anterior, fuera del buzón/caja fuerte y el cobro indebido de \$1300 de una tarjeta de crédito)"*. Asimismo, de ese episodio entre la documental acompañada por la demandada y reconocida por la actora, consta el acta de suspensión de fecha 17/01/2019 donde le comunican a la Sra. Galván la medida tomada y que consta con la firma de ella, pero no hay constancia de que aquella haya impugnado dicha medida en tiempo y forma, por lo que debo tomar como consentida la misma, sin perjuicio de lo expresado en el TCL CD838548045 del 05/06/2019 en respuesta al despido propiciado.

A más de las situaciones señaladas precedentemente, entre los antecedentes relacionados al mal manejo de fondos, también constan en la causa los siguientes: a) Acta de apercibimiento del 07/04/2018 en la que se le imputa a la actora la confección errónea e irregular del remito correspondiente al día 03/04/2018 en donde declaró como envío de efectivo las cobranzas realizadas con débito, lo que originó un faltante de \$4.149,79. c) Un acta de apercibimiento del 08/12/2018 en la que se le endilgó a la actora un faltante en su caja de \$2.687,94. C) Una nota dirigida a la Sra. Galván

en la que se le comunica una faltante de caja de \$400 en el cierre de caja de fecha 17/01/2019 y se le solicita explicaciones al respecto. De ninguna de estas circunstancias se registra descargo alguno entre el material probatorio por parte de la Sra. Galván, por lo que corresponde tener por cierta la existencia de esos hechos.

Es sabido que la justa causa de despido supone un comportamiento contractualmente ilícito, objetivamente grave según las circunstancias y capaz de hacer no exigible a la parte afectada la prosecución de la relación de trabajo (art. 242 LCT). Desde esta perspectiva, considero que los antecedentes reunidos en la causa justifican la medida adoptada por la firma empleadora que se presenta como una sanción proporcionada con relación a la falta imputada.

La función de cajera desempeñada por la actora le imponía el deber de atención en las rendiciones diarias de caja y dar explicaciones satisfactorias en caso de faltante de dinero, lo que no se observa en el descargo al pie de la nota de fecha 31/05/2019, en el que la actora se limitó a señalar que efectivamente tenía un faltante, que no pidió un vale por no saber la fecha en que podía hacerlo, que le había comunicado al Sr. Soria que sacó el dinero para pagar la boleta de luz de su casa y que luego repondría ese dinero al momento de cobrar sus haberes.

Este comportamiento constituye un incumplimiento al deber de diligencia (art. 84 LCT) esperable de una trabajadora con una función de relevancia como la de la actora. Además, debe interpretarse que la conducta de la actora se encuentra reñida con el principio de buena fe con el cual debe desarrollarse la relación contractual, regida por los arts. 62 y 63 LCT, que exige el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias internas de los dependientes, determinadas por el empleador, en ejercicio regular del derecho de organización y dirección establecido en los arts. 64, 65 y 66 de la LCT, particularmente, en el caso, el manejo de fondos dinerarios de propiedad de terceros clientes de la demandada, frente a los que esta última debe responder.

Por otra parte, aún cuando no se considerara la declaración del testigo Soria, no se acreditó en la causa que la actora hubiera recibido autorización para realizar la mencionada extracción (o retención) de las sumas de dinero enunciadas, siendo carga de ella misma la prueba de tal circunstancia eximente alegada para justificar su accionar (conf. art. 302 CPCC).

Resulta análogo al presente caso un precedente dictado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia en el que trató la cuestión relativa a los incumplimientos de los dependientes que cumplen funciones de cajero: “ Ello es así dado que por su función, con la responsabilidad que importa el manejo de dinero ajeno y la seriedad, diligencia y precaución que es dable esperar al ejercerla, y el contenido de las prestaciones a su cargo, cuidadosamente estudiadas, diseñadas, sistematizadas y dadas a conocer al trabajador, era razonable esperar de parte del actor un obrar prudente y respetuoso de las instrucciones impartidas por la empleadora. Además su conducta posterior, plasmada en el sumario interno realizado por la empleadora y consistente en minimizar la gravedad de su falta, no sólo ratifica el desapego del trabajador por las pautas que debía observar en el cumplimiento de su función sino que revela que, éste, no asumió la real trascendencia del incumplimiento de los deberes a su cargo. En este marco, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, resulta justificado que la empleadora haya considerado imposible la continuidad del vínculo laboral ante la eventualidad de que situaciones similares pudieran repetirse en el futuro, todo lo cual, razonablemente, reviste entidad suficiente para afectar de modo definitivo la confianza y el respeto recíprocos que necesariamente debe existir en el contrato de trabajo. La efectiva producción de un perjuicio concreto, económico o de otra índole, resulta irrelevante en la especie pues, la pérdida de confianza, se basa en la existencia de una conducta objetivamente reprochable, más allá del daño que ella hubiere causado al empleador. Esto es así toda vez que, en la causal de despido invocada, tras los incumplimientos de instrucciones específicas impartidas por el empleador sobre el modo de ejecución de las tareas, subyace el reproche al incumplimiento del deber de fidelidad del trabajador; y lo significativo para juzgar su obrar no es, en este plano, otra cosa que el acto desleal en sí mismo.” (CSJT, sent. 732 del 3/9/2012, “Paez Luis vs Bank Boston”).

Por ello, más allá de la cuantía de la suma de dinero extraída para fines personales, lo cierto es que este manejo irregular de fondos de propiedad de terceros (no propios incluso de la propia demandada) tiene la entidad suficiente como para justificar la pérdida de confianza del empleador, pues la tarea encomendada al dependiente (cajero) tiene como principal sustrato aquella confianza en él depositada. El incumplimiento alegado y acreditado no podría válidamente interpretarse como un acto de negligencia menor pues el propio sentido común debió persuadir a la actora de que su accionar no podía resultar un acto regular, sin que existiese una expresa autorización en tal sentido, lo que, como se indicó, no fue acreditado en autos.

En suma, por las razones expuestas considero justificado el despido directo de la dependiente, lo que exime a la demandada del pago de las indemnizaciones de ley. Así lo declaro.

TERCERA CUESTION

Procedencia de los rubros reclamados

De acuerdo a lo establecido en el art. 265 inc. 6 del CPCC supletorio al fuero, corresponde expedirme sobre los rubros reclamados:

1. Indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, integración del mes de despido, SAC s/ integración del mes de despido, sanción del art. 2 de la Ley N°25323, daño moral: Atento a lo decidido en la segunda cuestión, no resultan admisibles los rubros mencionados, los que dependen de la falta de justificación del despido.

2. Vacaciones no gozadas: Corresponde admitir la procedencia de este concepto de acuerdo a lo establecido en el art. 156 de la LCT, únicamente sobre la diferencia que resta abonar teniendo en cuenta lo decidido en la primera cuestión y lo ya abonado conforme recibo de liquidación final acompañado con la demanda.

3. SAC proporcional: Resulta procedente este concepto de acuerdo a lo establecido en el art. 123 de la LCT y solo por la diferencia que resta abonar teniendo en consideración lo decidido en la primera cuestión y lo ya abonado por este rubro en concepto de liquidación final conforme el recibo acompañado con el libelo inicial.

4. Diferencias salariales:

Como consecuencia de lo desarrollado en la primera cuestión, a los fines de decidir la procedencia de este rubro, resulta conveniente precisar que según se decidió *ut supra*, la Sra. Galván debía percibir una retribución íntegra, por jornada completa y acorde a su categoría profesional de Cajera B del CCT N°130/75. De modo que podemos afirmar que resultaba incorrecta la liquidación por jornada parcial que efectuaba el empleador según lo manifestó en su responde y conforme surge de los recibos de haberes acompañados por ambas partes a la causa en comparación con las escalas salariales vigentes durante el período reclamado, es decir, desde julio de 2017 a junio de 2019.

Asimismo, del informe remitido por SEOC en fecha 27/09/2021 en el cuaderno de prueba informativa n°2 ofrecido por la parte actora, la remuneración devengada a la época del despido para la Categoría Cajero B por jornada completa, era de \$28.010,04 más los adicionales previstos en la normativa convencional.

Dado que el informe de SEOC antes referido solo informa las escalas salariales vigentes desde mayo a agosto de 2019, será procedente remitirnos a lo establecido en los acuerdos salariales homologados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación para determinar si existió o no diferencia salarial durante el resto del periodo reclamado por la actora, esto es desde julio de 2017 a abril de 2019. Así, en función de la resolución N°95/2017 del 04/04/2017 (publicada en el Boletín Oficial el 09/05/2017) se estableció el básico a partir de abril de 2017; según resolución N°144/18 del 17/04/2018 (publicada en el Boletín Oficial el día 26/07/2018) se estableció el básico previsto a partir del mes de abril de 2018; y por último, según resolución N°62/2018 del 12/10/2018 (publicada en el Boletín Oficial el 03/07/2019) se estableció el básico con vigencia desde el mes de octubre de 2018. Cabe aclarar que lo referido a las escalas salariales vigentes desde mayo del 2019 a agosto de 2019 coincide con lo informado por SEOC en fecha 27/09/2021 en el cuaderno de pruebas n°2 ofrecido por el actor.

Del cotejo de las escalas salariales vigentes durante el período comprendido entre julio de 2017 y junio de 2019 con los haberes percibidos por la actora según los recibos de sueldo acompañados por ambas partes, surge que aquella percibió una suma inferior a la que le correspondía en virtud de la jornada completa de labor cumplida mientras duró la vinculación laboral con Cobros y Servicios SRL.

Por lo tanto, atento a lo tratado en la primera cuestión y lo previsto en el art. 260 de la LCT, resulta admisible este rubro por las diferencias salariales devengadas desde el mes de julio de 2017 a junio de 2019 reclamadas. Así lo declaro.

5. Diferencias sobre SAC: Resulta procedente este rubro ya que no se encuentra acreditado su pago en forma íntegra en virtud de lo tratado en la primera cuestión y de acuerdo a lo decidido en relación al rubro que precede. Así lo declaro.

CUARTA CUESTION

Intereses

Los importes que progresan devengarán intereses desde que son debidos y hasta su efectivo pago (art.128 y 149 LCT). Para su cómputo se aplicará la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en la causa “Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones (sentencia N° 1422 de fecha 23/12/15) donde ratifica su decisión de abandonar el criterio anterior de la aplicación de la tasa pasiva promedio del B.N.A. y más recientemente, en la causa “Bravo José Armando vs. Los Pumas S.R.L. s/ Indemnizaciones” (sentencia n° 686 de fecha 01/06/17) en la que sostuvo: “En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago”.

Para así decidir el Máximo Tribunal Provincial tuvo en consideración que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional (art. 14 CN) y su crédito reviste naturaleza alimentaria; además de ello tuvo en cuenta la función resarcitoria de los intereses moratorios y la profunda vinculación entre la tasa de interés y la depreciación monetaria en las circunstancias económicas actuales.

Asimismo, en este pronunciamiento destacó la función relevante de la casación como unificadora de la jurisprudencia aclarando que “El cambio de la tasa de interés aplicable a los créditos laborales lejos está de configurar una solución “única”, “universal” o “permanente” ya que el criterio propiciado “no resulta portador de una verdad absoluta y eterna, sino que por el contrario , conlleva la realización de un juicio histórico, basado en circunstancias económicas, sociales, sociológicas y jurídicas que se verifican en este momento, dejando a salvo que no es imposible, sino probable, que en otro momento a tenor de un cambio sustancial de las actuales circunstancias, esta Corte podrá revisar el criterio que hoy se establece en materia de intereses moratorios en los créditos laborales en ejercicio de la relevante función nomofiláctica que es privativa de la casación”.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que corresponde a los tribunales inferiores adaptar sus decisiones a los precedentes dictados por la CSJT como Máximo Tribunal Provincial, en orden a que pudieren prevalecer criterios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica, y en función de lo previsto en el art. 768 CCN, a los efectos del cálculo de intereses de los montos de condena se aplicará la tasa activa para descuento de documentos a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Así lo declaro.

El mencionado cálculo se efectuará para los rubros declarados procedentes conforme la tercera cuestión de la presente resolutive, desde el vencimiento del plazo para su pago. Así lo declaro.

Planilla de condena

GALVAN ANDREA DE FÁTIMA

Ingreso4/4/2017

Egreso4/6/2019

Antigüedad2 años, 2 meses

Categoría: Cajero ‘B’ del CCT N° 130/75

Básico \$ 28.010,04

Antigüedad \$ 560,20

Presentismo \$ 2.380,85

adicional de caja \$ 1.120,40

Total \$ 32.071,50

1) SAC 1° proporcionales 2019Debió cobrarCobró

\$ 32.071,50 / 2 x (154/180) \$ 13.719,47 \$ 7.171,55 \$ 6.547,92

2) Vacaciones proporcionales 2018Debió cobrarCobró

\$ 32.071,50 / 25 x 14 (154/360) \$ 7.682,90 \$ 3.956,48 \$ 3.726,42

Total Rubros 1) al 2) \$ al 11/06/2019 \$ 10.274,35

Interés tasa activa BNA desde 11/06/2019 al 09/05/2022128,26% \$ 13.177,88

Total Rubros 1) al 2) \$ al 09/05/2022 **\$ 23.452,23**

3) Diferencias salariales

MesDebió percibirPercibió s / Escrito Demanda Diferencia% Tasa activa al 09/05/2022\$ Intereses

jul-17\$ 20.538,65 \$ 9.499,92 \$ 11.038,73 203,65\$ 22.480,88

ago-17\$ 20.538,65 \$ 9.499,92 \$ 11.038,73 201,62\$ 22.256,79

sep-17\$ 20.538,65 \$ 9.556,14 \$ 10.982,51 199,64\$ 21.925,99

oct-17\$ 20.538,65 \$ 9.499,92 \$ 11.038,73 197,61\$ 21.814,14

nov-17\$ 20.666,41 \$ 10.363,55 \$ 10.302,86 195,48\$ 20.140,50

dic-17\$ 20.666,41 \$ 10.363,55 \$ 10.302,86 193,20\$ 19.905,60

SAC 2° 2017\$ 10.333,20 \$ 4.778,07 \$ 5.555,13 193,20\$ 10.732,78

ene-18\$ 20.998,59 \$ 10.536,27 \$ 10.462,32 190,91\$ 19.974,09

feb-18\$ 21.355,29 \$ 10.708,99 \$ 10.646,30 188,84\$ 20.104,96

mar-18\$ 21.699,73 \$ 10.881,73 \$ 10.818,00 186,55\$ 20.181,47

abr-18\$ 21.909,00 \$ 10.801,58 \$ 11.107,42 184,33\$ 20.474,81

may-18\$ 21.909,00 \$ 10.624,49 \$ 11.284,51 181,72\$ 20.506,72

jun-18\$ 21.909,00 \$ 12.085,00 \$ 9.824,00 178,99\$ 17.584,42

SAC 1° 2018\$ 10.954,50 \$ 5.035,42 \$ 5.919,08 178,99\$ 10.594,83

jul-18\$ 21.909,00 \$ 10.624,49 \$ 11.284,51 175,92\$ 19.852,22

ago-18\$ 25.195,35 \$ 10.587,89 \$ 14.607,46 172,52\$ 25.200,23

sep-18\$ 25.195,35 \$ 11.741,44 \$ 13.453,91 168,73\$ 22.700,94

oct-18\$ 25.195,35 \$ 12.676,95 \$ 12.518,40 163,97\$ 20.526,88

nov-18\$	25.195,35	\$	13.732,94	\$	11.462,41	157,78\$	18.085,60
dic-18\$	25.195,35	\$	13.732,94	\$	11.462,41	152,50\$	17.480,15
SAC 2° 2018\$	12.597,67	\$	6.866,47	\$	5.731,20	152,50\$	8.740,07
ene-19\$	28.919,88	\$	5.995,27	\$	22.924,61	147,73\$	33.866,06
feb-19\$	30.453,51	\$	9.301,96	\$	21.151,55	144,07\$	30.472,08
mar-19\$	31.768,05	\$	15.930,22	\$	15.837,83	140,06\$	22.183,20
abr-19\$	32.071,50	\$	16.081,94	\$	15.989,56	135,44\$	21.655,81
may-19\$	32.071,50	\$	16.081,94	\$	15.989,56	130,18\$	20.814,63
jun-19\$	4.276,20	\$	2.146,25	\$	2.129,95	125,02\$	2.662,95
Subtotales\$	314.864,49	\$	532.918,80				

Total Rubro 3) Diferencias salariales 09/05/2022\$ 847.783,29

Resumen condenaGALVAN ANDREA DE FÁTIMA

Total Rubros 1) al 2) \$ al 09/05/2022\$ 23.452,23

Total Rubro 3) Diferencias salariales 09/05/2022\$ 847.783,29

Total General \$ al 09/05/2022\$ 871.235,51

Costas

Si bien el monto reclamado prosperó casi en su totalidad (82%), no puede dejar de considerarse que los rubros correspondientes a una de las principales cuestiones debatidas (es decir, la causa de despido y su justificación) fueron rechazados. En su mérito, teniendo en cuenta la perspectiva cualitativa para determinar la imposición de costas (cf. CSJT, “Santillán de Bravo Marta Beatriz vs ATANOR S.C.A. s/cobro de pesos”, sent. n°37 del 05/02/2019), corresponde imponerlas de forma proporcional. En consecuencia, la demandada deberá soportar el 60%, mientras que la parte actora el 40% (cf. art. 108 del CPCC supletorio según art. 49 CPL). Así lo declaro.

Honorarios

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46 inc. 2 CPL.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la acción, es de aplicación el art. 50 inc. 1 de la citada normativa, por lo que se toma como base regulatoria el monto del capital de condena actualizado, el que según planilla precedente resulta al 09/05/2022 en la suma de \$871.235,51.

Determinada la base regulatoria y teniendo en cuenta la calidad jurídica de la labor profesional desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido y lo dispuesto por los arts. 15, 39, 42 y concordantes de la Ley N°5480, con los topes y demás pautas impuestas por la Ley N°24432, ratificada por la Ley Provincial N°6715, se regulan los siguientes honorarios:

1) Al letrado Segundo Albino Medina Robles, por su intervención por la parte actora como coapoderado durante una etapa del proceso de conocimiento (presentación de demanda) la suma de \$54.016,60 (base x 12% más 55% por el doble carácter), la que dividida en dos en razón de su actuación conjunta con la letrada Deborah Medina Robles (cf. art.12 LH), arroja como resultado la suma de \$27.008,30. Por su intervención como apoderado de la actora durante dos etapas del proceso de conocimiento (ofrecimiento y producción de la prueba, participación en la audiencia del art. 69 del CPL, presentación de alegatos), la suma de \$ 117.035,97 (base x 13% más el 55% por el doble carácter). Asimismo, de acuerdo a las pautas del art. 38 y 59 de la Ley N°5480, se regulan honorarios por su intervención en la oposición a la prueba informativa (resolución del 30/09/2021 en el cuaderno de prueba n° 2 de la parte actora), en la suma de \$16.204,98 (base x 12% más 55% x 10%) y por su intervención en la oposición a la prueba de exhibición de documentación (resolución del 01/12/2021 en el cuaderno de prueba n°3 de la parte actora) en la suma de \$14.179,36 (base x 7% más 55% x 15%).

2) A la letrada Deborah Lorena Medina Robles, por su intervención por la parte actora como coapoderada durante una etapa del proceso de conocimiento (presentación de demanda), la suma de \$54.016,60 (base x 12% más el 55% por el doble carácter), la que dividida en dos debido a su actuación conjunta con el letrado Segundo Medina Robles (cf. art. 12 LH), arroja como resultado la suma de \$27.008,30.

3) Al letrado Santiago Viejobueno, por su intervención como apoderado de la parte demandada durante una etapa y media del proceso de conocimiento (contestación de demanda y ofrecimiento de prueba), la suma de \$67.520,75 (base x 10% más el 55% por el doble carácter).

4) Al letrado Lucio Tosi, por su intervención como apoderado de la demandada durante una etapa y media del proceso de conocimiento (participación en la audiencia del art. 69 del CPL, producción de la prueba, presentación de alegatos), la suma de \$74.272,83 (base x 11% más el 55% por el doble carácter). Asimismo, de acuerdo a las pautas del art. 38 y 59 de la Ley N°5480, se regulan honorarios por su intervención en la oposición a la prueba informativa (resolución del 30/09/2021 en el cuaderno de prueba n°2 de la parte actora), en la suma de \$5.401,66 (base x 8% más 55% x 10%) y por su intervención en la oposición a la prueba de exhibición de documentación (resolución del 01/12/2021 en el cuaderno de prueba n°3 de la parte actora) en la suma de \$15.192,17 (base x 15% más 55% x 15%).

Por lo expuesto,

RESUELVO:

I) ADMITIR PARCIALMENTE la demanda promovida por Andrea de Fátima Galván, DNI N°27.562.746, con domicilio en calle Costa Rica N°244 de esta ciudad por la suma de **\$871.235,51 (pesos ochocientos setenta y un mil doscientos treinta y cinco con cincuenta y un centavos)** en concepto de vacaciones no gozadas, diferencias salariales, SAC proporcional y SAC sobre diferencias salariales en contra de Cobros y Servicios SRL, CUIT N°30-68522850-1 con domicilio en calle 25 de mayo n°319 de esta ciudad, atento lo considerado.

II) ABSOLVER a la demandada del reclamo por indemnización por antigüedad, substitutiva de preaviso, integración mes de despido, SAC sobre preaviso, SAC sobre integración mes de despido, sanción del art. 2 de la Ley N°25323 y daño moral, conforme lo considerado.

III) COSTAS: conforme lo considerado.

IV) REGULAR HONORARIOS: 1) Al letrado Segundo Albino Medina Robles por el proceso de conocimiento, en la suma de \$144.044,27 (pesos ciento cuarenta y cuatro mil cuarenta y cuatro con

veintisiete centavos) conforme lo considerado. Por la incidencia resuelta el 30/09/2021, la suma de \$16.204,98 (pesos dieciséis mil doscientos cuatro con noventa y ocho centavos) y la resuelta en fecha 01/12/2021, la suma de \$14.179,36 (pesos catorce mil ciento setenta y nueve con treinta y seis centavos), de acuerdo a lo considerado. 2) A la letrada Deborah Lorena Medina Robles por el proceso de conocimiento, en la suma de \$27.008,30 (pesos veintisiete mil ocho con treinta centavos), conforme lo considerado. 3) Al letrado Santiago Viejobueno, por el proceso de conocimiento, en la suma de \$67.520,75 (pesos sesenta y siete mil quinientos veinte con setenta y cinco centavos), de acuerdo a lo considerado. 4) Al letrado Lucio Tosi, por el proceso de conocimiento, en la suma de \$74.272,83 (pesos setenta y cuatro mil doscientos setenta y dos con ochenta y tres centavos). Por la incidencia resuelta el 30/09/2021, la suma de \$5.401,66 (pesos cinco mil cuatrocientos uno con sesenta y seis centavos) y la resuelta en fecha 01/12/2021, la suma de \$15.192,17 (pesos quince mil ciento noventa y dos con diecisiete centavos), según lo considerado.

V) PLANILLA FISCAL: Oportunamente practíquese planilla fiscal y repóngase (art.13 Ley 6204).

VI) COMUNÍQUESE a la Caja de Previsión para Abogados y Procuradores.

REGÍSTRESE, ARCHÍVESE Y HÁGASE SABER.JMS

LEONARDO ANDRES TOSCANO

Juez

Juzgado del Trabajo de VIª Nominación

Actuación firmada en fecha 10/05/2022

NRO. SENT.: 278 - FECHA SENT.: 10/05/2022

Certificado digital:
CN=TOSCANO Leonardo Andrés, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20273642707

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.